

que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. (Firmados) *Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—José M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—José García Ramírez.—L. Guzman.—Lic. Juan A. Mateos.* Secretario.—Son copias.—México, Enero 20 de 1871.—*Lic. Enrique Landa,* Oficial mayor.

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, sobre la importacion de ciento cuatro cargas de maiz hecha en Isla Mujeres, procedentes del punto denominado "San Pedro."

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El fiscal creo que debe procederse á celebrar el correspondiente juicio, que reclama el hecho de haber sido importadas á Isla Mujeres las cargas de maiz á que se refieren estas diligencias, y por haber venido los cayucos conductores de un puerto extranjero, sin documentos legales que cubriesen sus respectivas cargas, segun que en todo lo que hasta aquí se ha actuado no se habla de ellos. Pide, por tanto, el fiscal: que para esclarecer debidamente ese hecho, que aparece haberse verificado con infraccion de los preceptos de la Ordenanza de Aduanas, vigente, se abra el indicado juicio de comiso, mandando vd. que comparezcan, por sí ó su poder, dentro del término que al efecto les señale, los propietarios del maiz referido de la vecina colonia inglesa, á bordo de los cayucos Isabel, Esperanza, Desengaño y Guadalupe, y á los due-

ños ó patronos de estas embarcaciones, que tienen derecho á ser considerados como partes para defender sus respectivos derechos ante vd. El fiscal, si se sirve vd. proveer de conformidad con esto su pedimento, allegará oportunamente lo que estime conforme á los intereses de su ministerio, en cuanto á lo sustancial del caso que ha motivado estas diligencias.

Mérida, Agosto 20 de 1860.—(Firmado.)—*P. Hijuelos.*

Acta del juicio verbal á que se refiere el anterior pedimento.

En la ciudad de Mérida, á los nueve días del mes de Setiembre de mil ochocientos setenta años, reunidos ante el ciudadano Juez de Distrito del Estado, Lic. Januario Manzanilla, el ciudadano promotor fiscal Lic. Prudencio Hijuelos, y el presidente de la Junta municipal de Isla Mujeres, ciudadano Joaquin Avila, á efecto de procederse al juicio verbal prevenido para este día en providencia de 20 de Agosto próximo pasado, y despues de impuestos los concurrentes de las constancias anteriores, el ciudadano fiscal dijo: que el artículo 23 de la Ordenanza vigente de Aduanas, designaba como caso de contrabando la introduccion clandestina de mercancías por las costas, puertos, riveras de los rios ó algun otro punto que no esté habilitado para el comercio extranjero: que es un hecho plenamente probado en las diligencias que proceden, que el maiz que ha motivado este juicio, y las embarcaciones en que fué importado á Isla Mujeres, proceden del puerto extranjero de Bélice, sin que el cargamento y las embarcaciones hayan venido con los documentos prevenidos por la misma Ordenanza, lo cual hace comprender, que aunque la introduccion se hubiese hecho en algun puerto habilitado del Estado, siempre importaria un caso de contrabando, conforme á la cláusula segunda del citado

artículo 23: que no se ha justificado la apremiante necesidad con que pretende cohonestarse esa violacion de la ley; pero aun cuando se justificara, ella no podría autorizar el hecho de que se trata, porque para ocurrir á los inconvenientes de aquel peligro, pudo y debió haberse pedido previamente la autorizacion de la aduana de Sisal, pues que la Junta municipal de Isla Mujeres, ni otra autoridad alguna local del Estado, tiene facultad de despachar embarcaciones para el extranjero, con pretexto ó con razon de cualquier grave conflicto, y mucho menos de recibirlas de él sin las formalidades que legalicen la importacion: que aunque en la cláusula primera del referido artículo 23, se especifican algunos casos de excepcion del de contrabando, que en ella se define; sin embargo, el que se ha alegado en estas diligencias, y se ha repetido en el oficio recibido hoy del juzgado primero de paz de Isla Mujeres, no se encuentra comprendido en las excepciones de dicha cláusula; con fundamento de la cual, y con el de la segunda del referido artículo 23 de la citada Ordenanza, pedia, en cumplimiento de la fraccion primera, art. 26 de esta misma ley fiscal, se imponga la pérdida absoluta de las ciento cuatro cargas de maiz que se versan en este juicio, y la de las cuatro embarcaciones que las importaron del puerto extranjero de la vecina colonia á Isla Mujeres, sin ninguno de los documentos aduanales que justifique de algun modo esa importacion á un puerto no habilitado para el comercio extranjero; y que para prevenir los efectos del abuso, que aparece haberse cometido por las autoridades de dicha Isla, abrogándose facultades aduanales de que carecen absolutamente, pedia tambien se les hiciese un serio apercibimiento, para que se abstuviesen en lo sucesivo de despachar por sí y ante sí, embarcaciones de género alguno para el extranjero, y principalmente de recibirlas, con procedencia de él, autorizando su respectiva descarga.

El ciudadano, Avila dijo: que en virtud de que en Isla Mujeres habia mucha esca-

sez de maiz, vinieron varias canoas de allí á comprarlo á Sisal, y que no habiéndolo encontrado, el cabo de mar, con licencia del que habla, que es el presidente municipal, despachó los cayucos para Hlobuá, que es punto mexicano, situado siete leguas mas acá de Bacalar chico; pero que no habiendo encontrado maiz en aquel punto, se dirigieron á San Pedro. En este estado, por disposicion de la autoridad, quedaron citados los concurrentes para oír sentencia, mandando la acumulacion del oficio que se recibió hoy del juez primero de paz de Isla Mujeres, como lo verifiqué agregándolo á la foja siguiente. Con lo que se concluyó esta acta que firmaron los presentes, de que doy fé.—(Firmados).—*J. Manzanilla.*—*Prudencio Hijuelos.*—*Joaquin Avila.*—*Anacleto Castillo.*

Sentencia en Juicio verbal del juez de Distrito.

En la ciudad de Mérida, á doce de Setiembre de mil ochocientos setenta años, hallándose en audiencia pública el ciudadano juez de Distrito de este Estado, le di cuenta con estos autos de juicio de comiso, sobre la importacion de ciento cuatro cargas de maices, que se hizo en Isla Mujeres, por los cayucos *Isabel, Esperanza, Descarga y Guadalupe*, procedentes de San Pedro, puerto sujeto á la colonia inglesa de Bécice; habiendo visto el acta de juicio verbal, que comprende la demanda y contestacion, con la citacion para sentencia; y considrando: que aunque fueron citados los importadores y demas interesados no concurrieron al juicio: que no se ha probado la necesidad absoluta de granos en Isla Mujeres, pero aun cuando se hubiese probado, tampoco seria motivo legal para no incluir este caso entre los de comiso, porque aunque en el artículo 99 de la Ordenanza general de Aduanas, esté permitida la importacion de maices en este Estado

en los años de escasez, libre de derechos, con solo el permiso del Supremo Gobierno, el cual tambien se otorgó; esta franquicia no se ostiendo hasta introducir aquellos granos en un punto que no es puerto habilitado, y sin los documentos que previene la misma Ordenanza: que no solamente se ha dejado de probar la necesidad absoluta de granos en dicha Isla, sino que ni siquiera se ha alegado como excepcion por los dueños de ellos, al practicarse el catco que la autoridad verificó en sus casas: que lo manifestado por el ciudadano presidente municipal, Joaquín Avila, de que los cayucos fueron despachados para Hobuá, se falsifica por el oficio remitido por el ciudadano Gobernador, acompañado de otro de la gefatura de Sisal, en el que consta que fueron despachados hasta para el extranjero, cuyos oficios se acumularán á continuacion: que el ciudadano Avila expresa, que antes del despacho de los cayucos ocurrieron á Sisal por granos, y no hubo; sin embargo, tampoco pidieron permiso para que fueran los cayucos á San Pedro, lo que demuestra que no hubo intencion de participar este hecho á la Aduana: que por lo expuesto, hay que considerar el caso comprendido en las fracciones primera y segunda del artículo 23 de la Ordenanza general de Aduanas. En vista de estos fundamentos, y de conformidad con las fracciones primera y segunda del artículo 26 de la mencionada Ordenanza, de acuerdo con el parecer fiscal, la autoridad, en nombre de los Supremos poderes de la Union, falla: 1º Que se declaren bastantes los Estrados, pronunciándose este fallo en rebeldía de los interesados. 2º Que se declaren caidas en pena de comiso las ciento cuatro cargas maices y los cuatro cayucos en que se importaron de San Pedro á Isla Mujeres. 3º Que se saque testimonio, para aplicar la pena corporal á los responsables de este contrabando, en cuya causa depurarán su conducta los que despacharon los cayucos al extranjero. 4º Que se saque el extracto de este juicio para remitir á la superioridad

dentro de cinco dias, y testimonio de este fallo. Con lo que se concluyó esta acta, que firma la autoridad, de que doy fé.—(Firmado.)—*J. Manzanilla.*—*José Anacleto Castillo.*—Enterado.—*Prudencio Hijuelos.*—Apeló.—*Joaquín Avila.*

Acta sobre el recurso de apelacion en el negocio á que se refiere la anterior.

En la ciudad de Mérida, á los catorce dias del mes de Setiembre de mil ochocientos setenta años, comparecieron ante el ciudadano Juez de Distrito, el ciudadano Fiscal Lic. Prudencio Hijuelos y el ciudadano Joaquín Avila, con su abogado el ciudadano Lic. Juan José Herrera, á efecto de tratar sobre la apelacion interpuesta del fallo anterior, por el segundo, y el ciudadano fiscal dijo: que por lo que constaba del oficio con que se presentó el ciudadano Avila, y de lo que habia expresado en el juicio verbal de que apela, parece que no tiene la personalidad suficiente para interponer este recurso, puesto que no habia venido á representar á los que tienen derecho á ser considerados como partes en él, segun la ley especial de la materia, y para cuyo juicio fueron citados previa y oportunamente; sino mas bien á las autoridades que despacharon las embarcaciones para el punto de la costa del Estado que dicen, y que las recibieron con procedencia del extranjero, sin ninguna clase de formalidades, y sin tener ellos la menor competencia para semejante acto, que incumbe exclusivamente á las autoridades administrativas de la federacion: que sin duda por eso, el ciudadano juez siguió el juicio respectivo, declarando por bastantes los Estrados del tribunal, y haciéndose en él las notificaciones correspondientes, y que seria una contradiccion admitir la personalidad del ciudadano Avila en representacion de las partes, y dar por bastantes los Estrados, cuando esta declaracion supone que en realidad no ha habido

parte contraria con quien seguir el juicio: que esto, no obstante, si por el hecho de habérsele admitido al juicio con el indicado carácter que tiende á justificar una falta ministerial, que lo es la que se ha juzgado, entiendo el ciudadano juez que puede otorgarse el recurso interpuesto, él por su parte no se opondrá á está concesion; pero para el efecto, siempre es necesario justipreciar el maíz y embarcaciones á que se ha impuesto la pena de comiso, para saber si el valor total de ambas cosas excede de la cantidad de quinientos pesos, que es la necesaria para que en este género de juicios pueda tener lugar el recurso de apelacion.

El ciudadano Avila, por medio de su abogado, dijo: Que si bien es cierto que la comunicacion del ciudadano juez de paz de Isla Mujeres, en que expresa que él pasaba como comisario municipal á exponer las poderosas razones de suprema necesidad para salvarse de los crueles rigores del hambre, y que dieron lugar al permiso á los cayucos decomisados para ir á buscar maíz en donde lo encontrasen, no puede tenerse como una personalidad legítima para representar á los citados para este juicio, puesto que carece de las formalidades legales para constituir esa personalidad, acaso no la tendria para ser oído como se le oyó en el juicio respectivo; pero que para el efecto de apelar de la sentencia pronunciada en este juicio de comiso, en que se ha declarado como caso de contrabando el hecho de haber conducido maíz del extranjero los cayucos aprehendidos, tiene una personalidad incuestionable; puesto que si fuese ejecutoriada la referida sentencia pronunciada en este juicio, seria muy inmediata y directa su responsabilidad, por haber sido él quien como comisario municipal dió aquel permiso, habiendo querido manifestar su buena fé oxitada por la suprema necesidad del hambre que ha referido, formulando una acta en que la hacia constar, que remitió al jefe político de Sisal, dejando copia en el lugar de su vecindad, y que por los principios generales de jurisprudencia,

y una ley expresa y terminante recopilada, puede apelar de una sentencia todo aquel á quien ésta perjudique, aunque no haya litigado, como sucede con él en el presente caso, pues indudablemente se le exigiria la responsabilidad, si como ha dicho se ejecutoriase el mencionado fallo: y aunque cualquiera responsabilidad que se le exigiese, la sobrellevaria con toda resignacion y agrado, por haber tenido la satisfaccion de salvar á un pueblo entero de las miserias del hambre; sin embargo, queriendo en lo posible remediar este mal, que para él seria de trascendencias incalculables, suplica que se le conceda el recurso de apelacion que ha interpuesto para justificar ante quien corresponda oportunamente, y con pruebas suficientes, el hecho que ha dado lugar á este juicio y que en manera alguna puede ser punible. En este estado, y habiendo interrogado el ciudadano Juez al ciudadano Joaquín Avila, si estaba en disposicion de prestar la caucion de *rato et grato* por las resultas de este juicio en nombre de la persona del reo, y contestando que estaba en disposicion de prestar dicha caucion, dispuso: que conforme al artículo 127 del arancel de procedimientos de 1º de Agosto de 1853, se admitia como parte en el estado de este juicio, á dicho ciudadano Avila, previo el otorgamiento de la escritura de la referida caucion, y con constancia de haberse otorgado, dirijase oficio al ciudadano administrador de la Aduana marítima de Sisal, para que mande avaluar los cayucos y los granos que son materia de este procedimiento, y remitiendo á la mayor brevedad las diligencias relativas. Con lo que se concluyó esta acta, y firman el ciudadano Juez con los concurrentes, de que doy fé.—(Firmado.)—*J. Manzanilla.*—*Prudencio Higueros.*—*Joaquín Avila.*—*Juan José Herrera.*—*José Anacleto Castillo.*

Dos actas sobre el recurso interpuesto de apelacion.

En la ciudad de Mérida, á los diez y nueve dias de dicho mes y año, ante el ciudadano Juez de este conocimiento, compareció el ciudadano Fiscal, Lic. Prudencio Higueros, á efecto de calificar el grado de apelacion interpuesto por D. Joaquín Avila, que prestó la caucion de *rato et grato* para ser admitido como parte en este juicio, é impuesto el ciudadano Fiscal de los avalúos de los objetos que son materia del juicio, dijo: que convenia en que se conceda la apelacion, en virtud de dichos avalúos que ha tenido á la vista. En este estado, la autoridad mandó acumular en seguida los avalúos referidos y dispuso: que las partes fuesen citadas para oír resolution en este artículo de apelacion. Con lo que se concluyó esta acta que firma el ciudadano Juez y el ciudadano Fiscal de que doy fé. (Firmado.)—*J. Manzanilla.*—*Prudencio Higueros.*—*José Anacleto Castillo.*

En la propia fecha de mes y año;—habiendo visto el ciudadano Juez de este conocimiento el artículo de apelacion promovido por D. Joaquín Avila, visto el avalúo de los cayucos y del maiz que motivaron este juicio, el cual excede de quinientos pesos, y el consentimiento de las partes, dijo: que debia conceder y concedió la apelacion interpuesta en tiempo y forma; mandando que en el término de veinticuatro horas se saque testimonio del extracto y de la sentencia, para entregar al interesado y pueda ocurrir á la superioridad. Con lo que se concluyó esta acta que firma la autoridad de que doy fé.—(Firmado.)—*J. Manzanilla.*—*José Anacleto Castillo.*

Pedimento del ciudadano Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

Ciudadano magistrado:

Los fundamentos legales en que se apoya la sentencia definitiva que el ciudadano

juez de Distrito de este Estado pronunció en este juicio, declarando caídas en pena de comiso las ciento cuatro cargas de maiz extranjero y cuatro embarcaciones menores que han sido objeto de él; no quedan desvirtuados ni con las razones de mera equidad, que en su alegato para definitiva ha aducido el representante en esta superioridad del fiador de los importadores de aquel cereal, ni en las pruebas que al efecto ha producido. Con estas se quiere demostrar que en Isla Mujeres se sufrió una grande escasez de maiz; que á causa de ella vino á Sisal una embarcacion denominada *Micaela* y otra de un Sr. Rojas, en busca de dicha semilla, y que no habiéndola encontrado, se dispuso la expedicion, cuyo resultado fué el de la importacion que motiva este juicio. El Fiscal pudiera tachar, por una parte, á los testigos de Isla Mujeres presentados en el interrogatorio de fecha 30 de Setiembre último, como interesados en la cuestion; y alegar, por otra parte, la singularidad del testigo Urcelay para destruir por completo semejante prueba; pero basta su misma inconducencia para no hacer de ella mérito alguno; porque en efecto, no estando exceptuado en la Ordenanza de Aduanas marítimas el caso de necesidad extrema de un artículo destinado al sustento comun de los habitantes de un Estado, para traerlo del extranjero é introducirlo por cualquiera de sus puertos inhabilitados para esta clase de operaciones, principalmente cuando las embarcaciones conductoras no cubren sus respectivos cargamentos con los papeles que las leyes aduanales exigen, es superfluo invocar esa necesidad como una ley suprema que sanciona los abusos del género á que corresponden los cometidos por los pobladores de Isla Mujeres, pues que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir, como enseña una regla de Derecho. Si por las consideraciones que alega la representacion contraria, es decir, si por misericordia intempestiva se absolviera el caso en cuestion, no solo quedarian violados los

principales preceptos de la citada Ordenanza, sino se abriría una extensa puerta á los infractores mismos y á otros extraños, para la repetición impune de esos hechos reprobados, porque no habría justicia en castigar mas tarde, bajo la acción de la propia ley, lo que hoy ha recibido el sello de la aprobación judicial. La pequeña población de Isla Mujeres no está tan incomunicada con el resto del Estado, que á causa de su aislamiento no haya podido, desde que empezó á amenazar la escasez, tratar de conjurar el peligro sin necesidad de infringir las leyes fiscales; y esto es tan cierto, que según consta de las pruebas producidas, hubo tiempo de sobra para haber venido embarcaciones á Sisal, y regresándose sin llevarse la semilla que buscaban, sin que álguien de los necesitados de ella hubiese muerto de hambre. Esta oportunidad habría sido muy conveniente aprovechar para que las embarcaciones de la expedición al extranjero hubiesen sido despachadas en regla por la aduana de Sisal, y tomándose las precauciones necesarias á fin de evitar que se hiciese con daño de la hacienda nacional. ¿Quién garantiza que con esa importación de maíces, verificada sin intervención, sin noticia siquiera de los empleados de dicha aduana, no se verificó también la de otros artículos que no son de primera necesidad? Por esto, la ordenanza respectiva declara caídos en pena de comiso los efectos que así se importaron, juntamente con las embarcaciones conductoras; por esto, el ciudadano juez de Distrito impuso semejante pena á las ciento cuatro cargas de maíz y cuatro embarcaciones que las condujeron de «San Pedro,» punto extranjero de hecho, si no de derecho, á Isla Mujeres, en que fueron desembarcadas; y por esto el Fiscal pide á vd. la confirmación del fallo apelado por la parte contraria.

Mérida, Octubre veinte de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*P. Higueros.*

Sentencia en segunda instancia del tribunal de Circuito.

TRIBUNAL DE CIRCUITO DE YUCATAN, CAMPECHE, TABASCO Y CHIAPAS.

Mérida, Octubre veintiseis de mil ochocientos setenta.—Vistos estos autos de juicio de comiso seguidos en el juzgado de Distrito de este Estado de Yucatan, con motivo de la importación hecha en Isla Mujeres de ciento cuatro cargas de maíz, en los cayucos nacionales, *Desengaño, Guadalupe, Isabel y Esperanza*, procedentes de San Pedro; y en ellos la sentencia que con fecha 12 de Setiembre próximo pasado pronunció dicho Juzgado de Distrito, declarando caídos en pena de comiso las ciento cuatro cargas de maíz y los cuatro cayucos referidos, y mandando sacar testimonio para aplicar la pena corporal á los responsables: Vistos, la apelación interpuesta y concedida de dicha sentencia, las pruebas rendidas en esta segunda instancia, la expresión de agravios del apelante, lo alegado por el ciudadano Promotor fiscal, la citación para sentencia y cuanto mas consta en autos: Considerando: que la posibilidad y la intención de defraudar los derechos del fisco, son condiciones esenciales para el contrabando de importación: que en el caso presente no pueden presumirse aquella posibilidad ni aquella intención, porque la importación de maíz en el Estado de Yucatan, en la época que tuvo lugar la de que se trata, no solamente estaba libre de derechos, en conformidad con el artículo 9º de la Ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas de 31 de Enero de 1856, sino que también estaba premiada con la prima de la importación, igualmente libre de derechos, de seis quintales de harina por cada diez mil libras de maíz que se introduzca por el puerto de Sisal, según el decreto de 6 de Mayo último: Considerando, que solo la extrema necesidad que los habitantes de Isla Mujeres tenían de aquel grano, pudo obligarlos á prescindir de ganar la referida prima de ha-

rina, conduciendo el maíz hasta la Aduana de Sisal, cuya conduccion les hubiera prolongado por muchos dias la escasez de aquel efecto, tanto por el viaje de venida de Isla Mujeres, cuanto por el de retorno: Considerando: que tampoco puede presumirse clandestinidad, porque la introduccion del maíz se hizo públicamente en presencia y con autorizacion de las autoridades municipales de Isla Mujeres: que no existe indicio ni presuncion alguna de que con el maíz se hubiesen introducido otros efectos que causasen derechos aduanales: Considerando: que, segun el artículo 1º del decreto de 6 de Mayo ya citado, la exencion de todo derecho, concedida á la importacion del maíz, debe tener lugar cuando esta se haga por el puerto de Sisal: Considerando, por último: que, no obstante la extrema necesidad que del referido grano tenian los habitantes de Isla Mujeres, sus autoridades municipales pudieron oportunamente dar aviso á la aduana marítima de Sisal para que esta dictase las medidas que juzgase necesarias, con todo lo demas que convino ver y considerar, he venido en declarar y declaro: Primero: revócase el fallo que el día 12 de Setiembre próximo pasado pronunció el juzgado de Distrito de este Estado, declarando caídos en pena de comiso las ciento cuatro cargas de maíces y los cuatro cayucos conductores, y mandando sacar testimonio para aplicar la pena corporal á los responsables: Segundo: la aduana marítima de Sisal cobrará los derechos que corresponden por la importacion de aquel grano, segun la Ordenanza general vigente: Tercero: previo el pago de derechos, se devolverán en absoluta libertad á los interesados el maíz y los cuatro cayucos conductores, cancelándose la fianza que hubiesen prestado: Cuarto: amonéstese á las autoridades municipales de Isla Mujeres, para que en lo sucesivo y en casos idénticos al de que se trata, pongan oportunamente en conocimiento de la aduana marítima de Sisal la importacion que hagan de maíz: Quinto, líbrese y remítase

al juzgado de Distrito de este Estado, testimonio de esta sentencia para su cumplimiento, y elévense estos autos con atento oficio á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Y por este que el ciudadano magistrado proveyó, definitivamente juzgando, así lo mandó y firmó, de que doy fé. —(Firmado.)—*José Antonio Cisneros.*—*Mauricio Tejero.*

Recurso de denegada súplica.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROCURADOR GENERAL.

El Procurador general de la Nacion dice: que en el juzgado de Distrito del Estado de Yucatan se siguió un juicio de comiso, por haber sido importadas á Isla Mujeres, que no es puerto habilitado para el comercio, 104 cargas de maíz, procedentes del establecimiento inglés de Belice, y conducidas sin los documentos respectivos.

La averiguacion y demas diligencias practicadas produjeron la prueba evidente de que el maíz habia sido sacado del puerto de San Pedro (perteneciente á Belice) y conducido directamente á Isla Mujeres, en cuatro canoas pertenecientes á vecinos de esta Isla: que la Aduana marítima de Sisal no habia dado permiso para esta importacion, y mucho menos para que se hiciese directamente á Isla Mujeres; y que en fin, el Ayuntamiento de la misma Isla habia dispuesto la compra y conduccion del maíz urgido por la falta absoluta que de esa semilla tenian los habitantes, haciéndose dicha compra en el establecimiento de Belice, porque en ningun otro punto del territorio nacional habia podido encontrarse el efecto.

El Juzgado de Distrito pronunció sentencia, declarando caídas en la pena de comiso las 104 cargas de maíz y los cuatro cayucos (canoas) en que se trasportaron de San Pedro á Isla Mujeres, y que se sa-

caso testimonio para proceder criminalmente contra los responsables. Los fundamentos del Juzgado de Distrito, son sustancialmente que: aunque por el artículo 9º de la Ordenanza general de Aduanas, está permitida la importacion de maíz al Estado de Yucatan en los años de escasez, la cual se hace sin pagar derechos, con solo el permiso del Ejecutivo federal que en este caso ha sido dado, tal franquicia no se extiende hasta introducir dicho maíz por un punto que no es puerto habilitado, y mucho menos sin venir resguardado con los documentos que previene la misma Ordenanza: que no está justificada la necesidad que había de maíz en Isla Mujeres, y ni siquiera se alegó como excepcion en el acto de la aprehension: que se desendió de pedir el permiso respectivo, no obstante que las canoas habian estado en Sisal en busca de maíz que no encontraron, lo cual demuestra que no hubo intencion de dar conocimiento á la Aduana de esa importacion, y que por lo mismo se hallaba en el caso de las fracciones 1ª y 2ª del artículo 23 de la Ordenanza general de Aduanas marítimas.

El Presidente del Ayuntamiento de Isla Mujeres, previa fianza que prestó de *rato et grato*, apeló de esta sentencia, y los autos pasaron, previa aceptacion del recurso, al Tribunal de Circuito de Mérida, ante el cual se rindieron nuevas pruebas y se practicaron diversas diligencias, con presencia de las cuales el Tribunal de Circuito pronunció su fallo, revocando el de 1ª instancia y mandando: que la Aduana marítima de Sisal cobrara los derechos que correspondian á la importacion del maíz: que previo ese pago, se devolviese á los interesados el maíz y los *cayucos* en que fué conducido, y que se amonestase á las autoridades municipales de Isla Mujeres para que, en casos como el presente, avisen oportunamente á la Aduana marítima cuando quieran hacer alguna importacion de maíz.

Los fundamentos del Tribunal de Circuito son sustancialmente: que no aparece probada la intencion de defraudar los derechos

del Fisco, principalmente si se atiende á que la importacion de maíz en el Estado de Yucatán, estaba permitida sin pago de derechos y aun con una prima de cierta cantidad de harina: que solo la extrema necesidad de los habitantes de Isla Mujeres, los obligó á hacer la importacion sin previo permiso, y renunciando á la prima mencionada: que la importacion no ha sido clandestina, pues consta que se hizo públicamente y con autorizacion de los funcionarios municipales de la Isla: que no se han introducido otros efectos que causen derechos aduanales; y que, en fin, como la esencion de derechos al maíz solo se entiene cuando la introduccion es hecha por el puerto, lo que no se verificó en este caso; y como, á pesar de la necesidad, pudieron los habitantes y autoridades de Isla Mujeres, dar aviso oportuno á la Aduana marítima de Sisal, era justo que pagasen los indicados derechos.

El Promotor fiscal suplicó de este fallo, fundándose en que, aunque el valor del maíz y *cayucos* no llegaba á la cantidad que la ley exige para que tenga lugar la 2ª instancia, en el presente caso se deba fijar la atencion en que el fallo autoriza las importaciones hechas por un punto que no es puerto habilitado para el comercio, y esa circunstancia es de suma trascendencia para el Erario federal, por cuyo motivo, su representante está en obligacion de reclamarla. Aunque el representante de Isla Mujeres se opuso á la admision del recurso, el Tribunal lo declaró procedente, en atencion á los perjuicios irreparables que podian resentir los intereses del Fisco; y la causa ha sido elevada á esa respetable Sala, quien se sirvió pasarla al Procurador general que suscribe.

Por la relacion que queda hecha, se comprende que el negocio puede ser considerado, y lo ha sido en efecto, bajo dos distintos aspectos, que son: 1º el de la estricta aplicacion de las leyes fiscales, y 2º el de la equidad y consideraciones especiales fundadas en las circunstancias. El Juzgado

de Distrito la ha considerado en el primer terreno, y el Tribunal de Circuito en el segundo. Con esto último estaría el Procurador general, si en el ejercicio de su encargo lo fuera lícito atenerse á su juicio de hombre y á los instintos de benevolencia; pero su deber es procurar el cumplimiento de la ley, y bajo tal concepto, tiene necesidad de pedir ante esta Sala la revocación del fallo de 2ª instancia y la confirmación del de 1ª.

No cabe duda en que, conforme á la Ordenanza general de Aduanas, las importaciones solo pueden hacerse por los puertos habilitados para el comercio, y las que por otro punto se hagan, son ilegales, cayendo por lo mismo en la pena de comiso. No cabe duda en que las importaciones de maíz, que en ciertos casos especiales se permiten libres de derechos al Estado de Yucatan, se entiende que deben ser hechas por los puertos habilitados y con conocimiento de la respectiva Aduana marítima. No cabe duda en que las 104 cargas de maíz sobre que versa este juicio, fueron traídas al territorio de Yucatan sin permiso y aun sin conocimiento de la Aduana marítima de Sisal, y desembarcadas en Isla Mujeres, que no es puerto habilitado para el comercio. Estas circunstancias bastan y sobran para que ante la ley fiscal sea clandestina la importación, y el efecto y los trasportes caigan en la pena de comiso.

El Procurador general comprende y estima debidamente las circunstancias respectivas que precisaron á los habitantes y estrecharon á las autoridades de Isla Mujeres á solicitar violentamente un efecto de primera necesidad, de que absolutamente carecían. Pero si esta es una buena razón para que se le dispensen consideraciones, nunca puede serlo para que se declare buena y legal una importación hecha contra las prevenciones expresas de la Ordenanza general de Aduanas. Esto es tanto mas grave, cuanto que, como ha hecho notar el Promotor Fiscal, equivale á abrir la puerta para que se hagan importaciones

por puntos que no son puertos habilitados. No se necesita encarecer el grave peligro que con semejante práctica correrían los intereses fiscales de la federación.

El Procurador general encuentra justo que se conceda un indulto á los importadores de que se trata, en atención á las circunstancias especiales que atenúan su falta y casi le dan el carácter de necesaria. El mismo elevará su débil voz al Ejecutivo de la Unión, apoyando la necesidad y conveniencia de que tal indulto sea concedido, pero si ha de cumplir su deber, tiene necesidad de pedir, como ya lo ha hecho, que ésta sala, revocando el fallo de 2ª instancia, se sirva confirmar en todas sus partes el de 1ª, exceptuando solo la que se refiere al procedimiento criminal contra los interesados.

México, Diciembre diez de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—Leon Guzman.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero siete de mil ochocientos setenta y uno.—Visto el juicio de comiso instruido por el Juzgado de Distrito de Yucatan, en averiguación del contrabando de 104 cargas de maíz, importadas á Isla Mujeres en los cuatro cayucos nacionales *Desengaño, Guadalupe, Isabel y Esperanza*, procedentes del lugar denominado San Pedro; Vista la sentencia de primera instancia, y por la que se declaran caídos en la pena de comiso el efecto indicado y los cayucos en que se conducía; vista la de segunda, por la que se revoca el fallo del inferior, con las demás modificaciones que adelante se expresarán; lo pedido por el ciudadano procurador general de la Nación; lo alegado por el C. Lic. Peniche, en defensa de las autoridades mencionadas, con todo lo demás que de autos consta y ver convino. Considerando: que la población de Isla Mujeres, encabezada por sus autoridades y

movida por la escasez de semillas alimenticias, dispuso la introduccion de maíz, comprándolo en un pueblo cuya estranjería es dudosa, y despues de haber buscado inútilmente ese grano en otros puntos del territorio nacional; estando comprobada la referida necesidad, entre otros hechos notorios, por la existencia de una ley que ofrece la exencion de derechos y una prima á los comerciantes que hicieran esa clase de importaciones en la península Yucateca; no exigiéndose por el artículo 9º de la Ordenanza de Aduanas marítimas, para el caso de la escasez de comestibles, mas que un permiso del Gobierno, cuya licencia se pudo considerar como obtenida, en vista de la citada ley que ofrece un premio á los espresados introductores; no apareciendo de todo lo expuesto, una razon suficiente para calificar la mencionada introduccion de fraude ó contrabando; resultando simplemente una falta, que consiste en haberse hecho la importacion por un puerto no habilitado, cuya falta se explica por las graves y notorias dificultades de dar previo aviso á la administracion de Sisal; reconociéndose espresamente esta falta en el fallo del Tribunal de Circuito; y no pudiéndose por lo mismo considerar que dicho fallo autoriza el comercio por los puertos no habilitados; siendo, por otra parte, conveniente poner en conocimiento del Gobierno general esta clase de negocios en que aparecen en pugna los derechos mas sagrados y los intereses del comercio, con algunas leyes fiscales, para que con arreglo á sus atribuciones y si lo estima conveniente, dicte las medidas que juzgue oportunas; no llegando, por último, el interés que se versa en este negocio á la cantidad que se previene por la ley para que tenga lugar la 3ª instancia, con arreglo al artículo 137 del Arancel de Aduanas marítimas, esta 1ª Sala falla:

Primero: Ha causado ejecutoria el fallo del Juzgado de Circuito que dice: 1º Revócase el fallo que el día 12 de Setiembre próximo pasado pronunció el Juzgado de Distrito de este Estado, declarando caídos

en la pena de comiso las ciento cuatro cargas de maíz y los cuatro cayucos conductores, y mandando sacar testimonio para aplicar la pena corporal á los responsables: 2º La Aduana marítima de Sisal cobrará los derechos que correspondan por la importacion de aquel grano, segun la Ordenanza general vigente: 3º Previo el pago de derechos, se devolverán en absoluta libertad á los interesados el maíz y los cuatro cayucos conductores, cancelándose la fianza que hubieren prestado: 4º Amonéstese á las autoridades municipales de Isla Mujeres para que en lo sucesivo y en casos idénticos al de que se trata, pongan oportunamente en conocimiento de la Aduana marítima de Sisal la importacion que hagan de maíz: 5º Líbrense y remítase al Juzgado de Distrito de este Estado testimonio de esta sentencia para su cumplimiento, y elevense estos autos con atento oficio á la Corte Suprema de Justicia, para su revision.»

Segundo: Remítase al Gobierno general copia de esta sentencia, de la del Tribunal de Circuito y del pedimento del ciudadano Procurador general, para que dicte las providencias que estime oportunas; y Tercero: Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen por conducto del Tribunal de Circuito respectivo, y archívese á su vez el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*Pedro Ogazon.—José María Lafragua. Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Enrique Landa.*

Son copias. México, Enero doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Enrique Landa*, Oficial mayor.